

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por GLORIA PIEDAD CASTRILLÓN GÓEZ, quien actúa en nombre de su hijo JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ CASTRILLÓN, en contra del FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA (Rad. No. 05001-31-05-013-2020-00434-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, al abogado Manuel Alejandro Pretelt Patrón, con tarjeta profesional No. 314.465 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

ANTECEDENTES

Pretende el demandante Juan José Gutiérrez Castrillón, quien actúa por intermedio de su madre, que previa declaración de haber sido hijo de crianza de Luis Eduardo Castrillón Bustamante, se condene a la demandada a reconocerle y pagarle la sustitución pensional de manera retroactiva, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios consagrados en el artículo

141 de la Ley 100 de 1993 o, en subsidio, la indexación; y las costas del proceso.

Los anteriores pedimentos los fundamenta en los siguientes hechos: el señor Luis Eduardo Castrillón Bustamante falleció el 2 de febrero de 2019; era pensionado por jubilación por parte de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, hoy Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, a través de la Resolución No. 1034 del 22 de noviembre de 1984; procreó 6 hijos, entre ellos a la señora Gloria Piedad Castrillón Góez, la que a su vez junto con el señor José Elías Gutiérrez Londoño concibió al joven Juan José Gutiérrez Castrillón, nieto del causante, quien nació el 5 de diciembre de 2002; el señor José Elías Gutiérrez Londoño antes del nacimiento del menor Juan José, abandonó el hogar, sin llegar en ningún momento a preocuparse por su manutención, cuidado o educación, ni mucho menos cumplió con las obligaciones que por ley le correspondían, al punto que nunca generó lazos paternales con su hijo; como consecuencia de ese abandono, la madre junto con sus hijos se vieron en la obligación de mudarse a la casa de sus padres, siendo desde dicho momento el señor Luis Eduardo quien se encargó de proporcionarle a su hijo de crianza y nieto el vestido, alimentación, educación, recreación, transporte, salud y cualquier elemento que necesitara para su congrua subsistencia, así como la representación de la figura paterna, brindándole siempre amor y afecto, lo corrigió disciplinariamente, le brindó orientación y finalmente siempre le dio un trato digno e igualitario como a todos sus hijos miembros de su familia; estuvo pendiente del tratamiento médico de Juan José producto del diagnóstico autismo y aspenger, además era quien procuraba las celebraciones de las fechas especiales para el menor; luego del fallecimiento de su abuelo, desmejoraron de manera considerable las condiciones de vida del menor, por cuanto fue necesario cambiarse de residencia, además de que no fue posible continuar con las terapias médicas requeridas para su tratamiento; la señora Gloria Piedad, a partir del año 2002 se dedicó por completo al cuidado de sus padres que eran adultos mayores y de sus hijos menores, sin percibir ingresos mensuales por esa labor, y sin contar con ingresos económicos que le garantizaran a su hijo condiciones mínimas de subsistencia, por lo que fue el señor Luis Eduardo quien asumió dichas obligaciones; el 22 de agosto de 2019 presentó ante el Fondo Pasivo

Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia reclamación administrativa tendiente al reconocimiento y pago de la sustitución pensional en favor del menor Juan José Gutiérrez Castrillón, prestación que le fue negada mediante la Resolución 0396 del 13 de marzo de 2020, bajo el argumento que no ostentaba la calidad de beneficiario al no acreditar la calidad de hijo del causante, se interpuso el recurso de apelación y el mismo fue confirmado por la entidad mediante la Resolución No 1118 del 5 de agosto de 2022, cumpliéndose con el requisito de la reclamación administrativa.

La entidad demandada dio respuesta oportuna al escrito inicial, oponiéndose a la prosperidad de todas las pretensiones. Frente a los hechos manifestó que eran ciertos los del fallecimiento del afiliado, la negación de la solicitud presentada por la demandante y que el menor Juan José Gutiérrez Castrillón es el nieto del señor Luis Eduardo Castrillón Bustamante. De los demás, dijo que no le constaban. Formuló como excepciones las que denominó inexistencia de la obligación y buena fe de la entidad.

El Juzgado de conocimiento, que lo es el Trece Laboral del Circuito, mediante sentencia del 18 de enero de 2022, ABSOLVIÓ al FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA de la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra por parte de la señora GLORIA PIEDAD CASTRILLÓN GÓEZ, quien actúa en nombre y representación de su hijo JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ CASTRILLÓN. Le impuso las costas a la parte actora, fijándole como agencias en derecho la suma de \$1.000.000

Inconforme con la decisión, interpuso el recurso de apelación el apoderado de la parte actora a quien le fue concedido. Como argumentos expuso que contrario a lo señalado por la juez de instancia, sí se le debe dar credibilidad a los testimonios arrimados al proceso, por cuanto estos fueron rendidos con base en los conocimientos propios que ellos tenían, a más de que una de ellas era la cuñada de la señora Gloria Piedad, lo cual le da un mayor conocimiento del entorno familiar del menor Juan José, llegando incluso a señalar que la relación del causante con éste era la de un padre de familia, más no de un abuelo. Agrega que el despacho desestima que al no incluir el causante dentro de su EPS al joven Juan José es porque no lo tiene en su grupo familiar,

cuando es la misma norma, esto es, el Decreto 2353 del año 2015, quien enlista las personas a quienes se puede afiliar como beneficiarios, sin que dentro de ellos estén los nietos, por eso es que la afiliación al sistema de salud se hace a través de la madre. Continúa diciendo que el señor Luis Eduardo tenía dificultades en salud, y que según lo dicho en los testimonios, venía sufriendo desde el año 2002 de la patología de demencia senil o de alzhéimer, proceso que es lento y degenerativo, y que bajo este entendido es que se debe entender que el señor Luis Eduardo no aparezca dentro de la historia clínica de Juan José. Afirma que el testimonio de la señora Gloria Vélez resulta importante en la medida que vivía en el inmueble siguiente al que habitaba la señora Gloria Piedad con su hijo Juan José, a más de que los visitaba día por medio, lo que le permitía conocer de primera mano la convivencia existente en esa familia, entendiéndose incluso como un padre y un hijo de crianza entre el causante y Juan José. Señala frente al señor Elías, el padre biológico, que la historia clínica no hace ninguna referencia a su nombre, ni tampoco a que haga alguna reseña a una separación de la pareja, contrario a lo referido por los testigos quienes indican que no existía ninguna relación entre éste y su hijo Juan José, y que si bien luego del fallecimiento del señor Luis Eduardo volvió a aparecer, no implica que éste haya cumplido con el rol de padre frente a Juan José como si lo hacía el señor Luis Eduardo. Manifiesta que la demanda cumple con las sub reglas establecidas por la Sala de Casación Laboral frente a asuntos como el aquí debatido, cuando falta de por medio un padre o una madre y son reemplazados por otros miembros de su familia, situación que quedó demostrada con las pruebas traídas al plenario

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

La Sala restringirá su estudio al punto objeto de apelación planteado por el apoderado recurrente (problema jurídico), conforme a las directrices que para el efecto traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, y que en lo fundamental apunta a establecer

si al demandante le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes que depreca en calidad de hijo de crianza.

Para efectos del interrogante anterior, es preciso tener presente que la legislación a aplicar es la vigente a la fecha en que se produjo el deceso, que para el caso de autos es la Ley 797 de 2003, por cuanto el fallecimiento por causas de origen común del señor Luis Eduardo Castrillón Bustamante se dio el 2 de febrero de 2019.

Está por fuera de toda discusión que al momento de su deceso, el señor Luis Eduardo Castrillón Bustamante era pensionado por los Ferrocarriles Nacionales de Colombia mediante Resolución #1034 del 22 de noviembre de 1984, hoy FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA; que la señora Gloria Piedad Castrillón Góez era su hija, tal como se evidencia del registro civil de nacimiento; que el joven Juan José Gutiérrez Castrillón, nacido el 5 de diciembre de 2002, es hijo de la señora Gloria Piedad Castrillón Góez y del señor José Elías Gutiérrez Londoño, tal como lo certifica el registro civil de nacimiento, lo que lo hace nieto del fallecido; y que la entidad demandada le negó a éste el derecho a la sustitución pensional, al no acreditar la calidad de hijo del fallecido Luis Eduardo.

Por tanto, para aclarar el asunto puesto a consideración de esta Sala de Decisión Laboral, debe iniciarse diciéndose que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, modificado por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, es la norma aplicable al presente caso, puesto que, al señalar los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, dispone en la parte pertinente:

“(…)

“c) Los hijos menos de 18 años; los hijos mayores de 18 años hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan sus condiciones de invalidez.

”
...

“PAR. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil”

Previo a cualquier consideración puntual sobre lo que es objeto de esclarecimiento en el presente caso, y en atención a las particularidades del mismo, debe señalarse inicialmente que la familia en Colombia tiene consagración y protección constitucional, por cuanto en su artículo 42 se indica que ésta *“es el núcleo fundamental de la sociedad”*, y que *“El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia.”*

No es de ahora, sino de tiempo atrás que se ha considerado que la familia es el médula básica y esencial de la sociedad, por cuanto es en ella donde se cultivan, entre otros, los valores y las virtudes de los miembros que la integran.

Por lo demás, el anterior texto constitucional al regular que la familia *“Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla”*, permite concluir que existen varias maneras de conformarla dependiendo del interés que tengan quienes intervengan, sin que tal proceder interfiera en la protección brindada por este estatuto, pues así está dispuesto en el artículo 13 de la misma, donde se indica que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y que recibirán la misma protección, gozando de los mismos derechos sin que sean discriminados en razón de su raza, sexo, familia y demás.

Ahora bien, hablar de la conformación de la familia por vínculos jurídicos es referirse al matrimonio y, como tal, este puede ser religioso o civil siguiendo las ritualidades de cada uno y dependiendo de los deseos de quienes lo vayan a contraer, destacándose de este tipo de uniones el conocimiento que la pareja tiene sobre las obligaciones de tipo jurídico que adquieren al momento de celebrar el mismo, las que incluso pueden ir hasta después del divorcio, como lo es la obligación alimentaria.

En cuanto a la familia formada por vínculos naturales es hacer referencia a lo que se conoce como unión marital de hecho, figura que se encuentra consagrada a partir de la Ley 54 de 1990, definiéndose en su artículo 1° que es aquella que está “...*formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho*”, entendiéndose para todos los efectos que cubre de igual manera para las parejas del mismo sexo, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-075-2007, siendo su elemento primordial en este tipo de relaciones el de la voluntad inequívoca de dos personas de irse a vivir juntas.

A partir de la caracterización de cada tipo de unión de las parejas, se van formando lazos de consanguinidad o afinidad dependiendo de la manera en que cada sujeto pertenece a un núcleo familiar, siendo claro que los consanguíneos hacen relación a todas aquellas personas que son parientes naturales de otra por provenir de los mismos antepasados, y los de afinidad como aquella relación familiar existente entre aquellas personas que tienen vínculos matrimoniales o a través de una unión marital de hecho.

No se puede pasar por alto para el análisis del caso lo que se conoce como la familia nuclear, entendida ésta como aquella conviviente conformada por los miembros de un solo núcleo familiar, el cual está conformado por los padres y los hijos; y la familia extendida, que entre sus significados podemos encontrar que es aquella conformada por varios sujetos que habitan en una misma unidad de habitación, y está integrada por parientes pertenecientes a varias generaciones.

Bajo estos presupuestos, debe hacerse el análisis completo respecto de las obligaciones que surgen con la conformación de una familia, y de qué manera el sistema de seguridad social entra a proteger las contingencias que dentro de ellas se puedan presentar.

Así las cosas, y descendiendo al caso de autos, la falladora de primer grado para negar las súplicas de la demanda, entre otros argumentos, expresó que en el plenario no quedó evidenciado que existiera alguna relación de padre e hijo de crianza entre el señor Luis Eduardo Castrillón Bustamante y Juan José Gutiérrez Castrillón, arribando a dicha conclusión luego de tener en cuenta las diferentes probanzas obrantes al interior del plenario, como lo fueron la historia clínica de Juan José y las testimoniales, las que a su modo no dieron certeza de sus dichos.

Tales argumentos, en sentir de esta Sala de Decisión Laboral, y sin dubitación alguna, se ajustan completamente a derecho, pues son el resultado del análisis de las probanzas obrantes al interior del proceso.

Y es que debe tenerse presente que el demandante, a través de su madre, pretende se le reconozca que es beneficiario de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor Luis Eduardo Castrillón Bustamante en calidad de **hijo de crianza**, por cuanto su verdadero parentesco con el causante es a través de un lazo de consanguinidad como nieto.

En cuanto a la figura del hijo de crianza, debe considerarse la postura que sobre el asunto ha tenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que ha venido señalando una serie de elementos que debe cumplir quien quiera demostrar y beneficiarse de tal calidad. A este respecto es ilustrativa la sentencia SL3312-2020, la cual a su vez citó sentencia SL1939-2020, en la que se indicó:

“Y para ello, así como en la sentencia con radicación 17607 del 6 de mayo de 2002, la Sala precisó que esa relación paterno-filial debe ser contundente para merecer la protección de la seguridad social, de forma tal que no sea el producto de un fraude o un aprovechamiento ilegítimo de quien reclama, en esta ocasión es necesario reiterar, que para establecer esa calidad, se requiere demostrar: i) el reemplazo de la familia de origen, esto es, la relación de facto que se genera con otra persona por fuera del vínculo consanguíneo o civil, incluso, puede ser un pariente o familiar que asumió ese rol; ii) los vínculos de afecto, protección, comprensión y protección, que se asimilan a las obligaciones previstas en el artículo 39 de la Ley 1098 de 2006 -CIA- que permiten distinguir la interacción familiar entre sus miembros; iii) el

reconocimiento de la relación de padre y/o madre e hijo, en el sentido que no sólo basta el desarrollo de las manifestaciones de protección integral a quien se sumó al nuevo núcleo familiar, pues puede darse el caso que a pesar de que quien fue acogido en dicho entorno, no necesariamente vea a sus protectores como padres, por lo que se requiere que ante la sociedad, incluso en el ámbito familiar, se pueda exhibir esa condición; iv) el carácter de indiscutible permanencia, que no significa establecer un límite de tiempo específico y arbitrario de verificación de esos lazos afectivos, sino como lo ha explicado la jurisprudencia constitucional, un término razonable en el cual se pueda identificar el surgimiento de la familia de crianza y su desarrollo, al punto de que verdaderamente se hayan forjado los vínculos afectivos, y; v) la dependencia económica, como requisito esencial no sólo para acceder a la prestación pensional de sobrevivientes, sino como elemento indispensable de identificación de quien se exhibe como padre o madre y su relación con un hijo, a efectos de proporcionarle a éste último la calidad de vida esencial para el desarrollo integral, que al desaparecer la persona que hacía posible ese cometido de la paternidad responsable, el beneficiario se ve afectado.

Con sustento en lo expuesto es claro que hay elementos objetivos que permiten determinar la existencia de una relación parental de crianza, cuya evidencia dependerá en cada caso concreto de los soportes probatorios que se alleguen y que, analizados en conjunto, facilitarán inferir si en efecto aquella se tipifica.

Así las cosas, es dable la protección de la relación parental de crianza, eso sí, siempre y cuando se demuestre sin dubitación alguna, la verdadera vocación de familia nuclear, por el prohijamiento con actos positivos y en el largo plazo de la persona a proteger, en virtud del convencimiento social de la condición de hijo.

Por último, no se puede pasar por alto que no puede haber un manejo pendular del establecimiento de la condición de hijo de crianza, esto es, pretenderse la creación de un nuevo vínculo de tal naturaleza, o retornando a la situación filial consanguínea que precisamente queda desplazada por el verdadero vínculo filial, en este caso el de crianza”

Ahora bien, hechos los análisis correspondientes al material probatorio obrante al interior del plenario, nada distinto a concluir que la relación que se pudo haber presentado entre Luis Eduardo Castrillón Bustamante y Juan José Gutiérrez Castrillón, no era más que aquella sostenida por los lazos de consanguinidad, sin que pueda extenderse a considerarla como la de un padre e hijo de crianza.

Y se dice lo anterior porque si bien los testimonios traídos a la litis dan cuenta de manifestaciones de afecto que se daban entre los antes citados, entiende esta Sala que no era más de aquellas que un abuelo le brinda a su nieto que se encuentra conviviendo bajo el mismo techo fruto de la separación de que fueron objeto los padres del menor, sin que pueda pasarse por alto las dificultades médicas que tanto uno como otro padecían, por cuanto tales condiciones podrían incidir efectivamente en las expresiones afectuosas que de manera particular se prohijaban.

No encuentra esta Corporación ningún elemento en el presente debate que le permita determinar la diferencia entre las expresiones de cariño que le pueda brindar un abuelo a su nieto con las que le brinda un padre a su hijo, es decir, las manifestaciones de amor y comprensión en este tipo de lazos consanguíneos son propios de estas relaciones y de las obligaciones que de manera natural se deben presentar, por lo que para el caso sería injusto considerar que las salidas a hacer “*mandados*” juntos, acompañarlo en las tareas y otra serie de actividades descritas por los testigos, corresponden de manera exclusiva a las de un padre frente a su hijo, más cuando la integración de la familia de la señora Gloria Piedad al hogar del señor Luis Eduardo, como ya se dijo, fue por necesidades económicas fruto de la separación o abandono del padre biológico del joven Juan José, de donde resultaba dable deducir por las máximas de la experiencia que siendo el abuelo el hombre mayor de la familia, ejerciera frente a ese grupo familiar toda la autoridad, la que normalmente está encaminada a dar órdenes y ejercer algún tipo de control al interior del hogar, así como el de tener algunas obligaciones frente a su grupo familiar como era el sustento económico dado su carácter de pensionado y de que los otros miembros no aportaban económicamente.

Un asunto que resulta relevante es que en el interrogatorio que se le formuló a la señora Gloria Piedad, ésta manifestó que se fue a vivir a casa de sus padres con el fin de auxiliarlos dada la avanzada edad de ellos, a más de que indicó que su padre ya presentaba síntomas de demencia senil desde el año 2002, data del nacimiento de su hijo Juan José, el cual se transformó en Alzheimer, enfermedades estas degenerativas de la capacidad cognitiva, lo que implica para quienes la padecen una pérdida de la memoria y de reconocimiento de

manera sistemática de las personas, situación que queda demostrada con que era la señora Gloria Piedad quien administraba la mesada pensional de su padre, situación ésta que permite deducir que resultaría difícil para el señor Luis Eduardo ejercer de manera plena su supuesto rol como padre de familia, por cuanto las patologías médicas que este padecía le generan ciertas dudas a esta Sala respecto de la capacidad que pudiera tener en el reconocimiento de Juan José como un hijo o como un nieto.

A más de eso, téngase en cuenta que a las diferentes citas a las que asistió el joven Juan José, y que aparecen registradas en su historia clínica, no se evidencia que el señor Luis Eduardo lo haya acompañado a alguna, resultando claro que siempre era la madre de éste quien ejercía dicho acompañamiento y era ella quien describía al detalle las circunstancias de modo, tiempo y lugar del comportamiento habitual de su hijo tanto en su entorno familiar como educativo.

Ahora bien, no puede pasarse por alto que los padres del menor Juan José Gutiérrez Castrillón se encuentran vivos y con capacidades para entrar en el mundo laboral, pues no existe alguna probanza que de cuenta que sufren de alguna discapacidad, por el contrario, la señora Gloria Piedad realizó estudios de Gastronomía, y según relatos de la testigo Maryori de Balvanera López, el señor José Elías, padre del menor, trabaja como mecánico automotriz, a más de que la señora Gloria Piedad manifestó en su interrogatorio que nunca ejerció ninguna gestión tendiente a que su cónyuge respondiera de manera económica por sus hijos, por lo que resulta dable señalar que en el de autos eran los padres quienes estaban en la obligación de sustentar la crianza de sus hijos derivados de las obligaciones generadas por la patria potestad, sin que quede solamente como elemento para demostrar la calidad de padre de crianza del señor Luis Eduardo Castrillón Bustamante, el aporte económico que este brindaba, por cuanto las manifestaciones de cariño y aprecio que le entregaba a su nieto resultaban propios del parentesco que tenían.

Sin más consideraciones, y al no haber quedado demostrados los requisitos que para el asunto como el aquí debatido tiene consagrada la Corte Suprema de Justicia, habrá lugar a confirmar la sentencia venida en apelación en su

integridad, incluido lo relativo a las costas. En esta instancia las mismas estarán a cargo de la parte actora. Como agencias en derecho se fijará la suma de medio (1/2) salario mínimo legal mensual vigente, es decir, \$580.000.

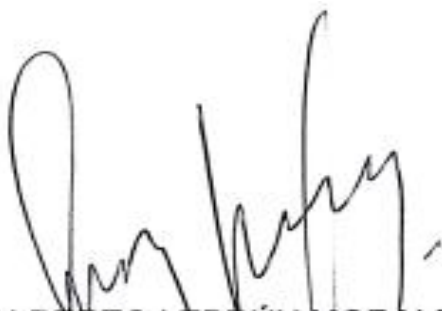
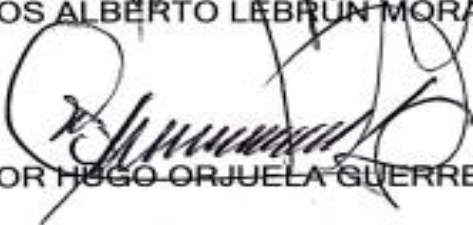
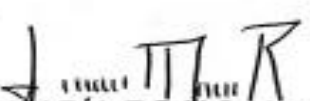
DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de apelación.

Costas de esta instancia a cargo de la parte demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de medio (1/2) salario mínimo legal mensual vigente, es decir, \$580.000.

Notifíquese por edicto.

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA
EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501320200043401
Proceso:	ORDINARIO LABORAL
Demandante:	JUAN JOSE GUTIERREZ CASTRILLON
Demandado:	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	21/02/2023
Decisión:	CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 22/02/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario